



México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día catorce de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.

Vo. Bo.

VISTO el amparo directo número 2031/57 promovido por la señora [REDACTED] por su propio derecho, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, -- por violación de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco en el Juzgado Séptimo de lo Civil de esta Capital, la señora [REDACTED] demandó de la sucesión testamentaria de su esposo el señor [REDACTED] -- representada por el albacea [REDACTED], la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal que constituyó con el autor de la herencia. Para fundar la demanda dijo sustancialmente lo siguiente: contrajo -- matrimonio con el autor de la sucesión bajo el régimen de sociedad conyugal. Durante la unión la sociedad conyugal adquirió dos bienes inmuebles que son el número [REDACTED] -- [REDACTED], Distrito -- Federal, y el ubicado en la calle [REDACTED] -- [REDACTED]. Dichos predios fueron adquiridos a nombre de su esposo aun cuando en realidad la adquirente fué la sociedad conyugal por haberse hecho con -- dinero de la misma. Al constituirse dicha sociedad no se hicieron capitulaciones matrimoniales para reglamentar la adquisición y administración de los bienes ni --

antes ni durante el matrimonio.

SEGUNDO.-El albacea de la sucesión demandada, al -- contestar, dijo fundamentalmente que no es verdad que durante la vigencia del matrimonio la sociedad conyugal haya adquirido los bienes que la actora menciona, porque dichas propiedades las adquirió el autor de la sucesión para sí y no para la sociedad conyugal, la -- cual no existe legalmente.

TERCERO.-En los escritos de réplica y dúplica las partes sostuvieron sus respectivos puntos de vista, y seguido el juicio por sus trámites el Juez del conocimiento dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son -- como sigue: ".....PRIMERO.-En el juicio ordinario civil sobre liquidación de bienes de sociedad conyugal, promovido por la señora [REDACTED] en contra de la sucesión del señor [REDACTED], la -- actora no probó su acción y la sucesión demandada sí -- probó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.-En consecuencia, se absuelve a la sucesión del señor [REDACTED] -- [REDACTED], representada por su albacea, señora [REDACTED] [REDACTED], de la mencionada demanda.-TERCERO.

No se hace especial condenación en costas, siendo a -- cargo de cada parte las que hubiere erogado.-CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes.....".

CUARTO.-La actora interpuso contra ese fallo el -- recurso de apelación que fué resuelto por medio de la -- sentencia que ahora se reclama en amparo, dictada el -- ocho de octubre de mil novecientos cincuenta y seis por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del -- Distrito Federal. Esta sentencia confirmó en todas sus partes la pronunciada por el inferior y condenó a la -- apelante a pagar las costas de ambas instancias.

QUINTO.-La demanda de amparo se presentó en tiempo por conducto de la autoridad responsable y se admitió-



esta Suprema Corte por auto de siete de junio del presente año. El Ministerio Público Federal se abstiene de intervenir. La última actuación está fechada el treinta de septiembre próximo pasado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La existencia del acto reclamado se acredita con el informe de la responsable y con la copia certificada de la sentencia impugnada, que se remitió.

SEGUNDO.-Los conceptos de violación se expresan en síntesis, como sigue:

1.-La responsable sostiene que el inferior no violó el artículo 19 del código civil porque sometió su sentencia a lo dispuesto por los artículos 178 y 179 del mismo código. La responsable afirma que el matrimonio de la actora con el autor de la sucesión demandada carece de régimen de sociedad conyugal porque no existen capitulaciones matrimoniales y dice que sólo son aplicables las disposiciones relativas al contrato de sociedad cuando existiendo capitulaciones matrimoniales, hay omisiones en las mismas. Con este criterio la responsable se desentiende del texto del citado artículo 183. En efecto, la separación de bienes es formalista, no hay disposición legal que pueda aplicarse como supletoria de capitulaciones anteriores al matrimonio ni del convenio de los consortes durante éste ni antes de la sentencia judicial que la decreta, según se desprende de los preceptos que contiene el capítulo sexto título quinto del libro primero del código civil. La separación puede ser absoluta o parcial, debe constar por escrito y siempre contendrá un inventario de los bienes de que sea dueño cada uno de los cónyuges y una nota especificada de las deudas. La falta de capitulaciones en el caso de sociedad conyugal sí puede suplirse con las disposiciones relativas al contrato-

de sociedad. En consecuencia la responsable viola el artículo 19 del código civil ya que la consideración que se comenta puede llevar a concluir absurdamente que no existió matrimonio ya que no puede considerarse sujeto ni al régimen de sociedad ni al de separación de bienes.

2.-La responsable se desentiende del artículo 312 del código de procedimientos civiles cuando hace valer el hecho de que la representante de la demandada expresó que el autor de la herencia adquirió bienes para sí y no para la sociedad y que la actora haya dicho en su réplica que cada socio aportó a la sociedad los bienes de que haya sido propietario. También la responsable se desentiende de lo expuesto en el segundo agravio y valoriza la prueba confesional con violación de los artículos 19 del código civil y 81 del de procedimientos civiles. En efecto, en ninguno de los escritos que fijan la controversia la demandada hizo valer la existencia de un bien que las partes hubieren considerado como perteneciente al régimen de separación. Aun cuando este hecho existe, debió probarse con los documentos correspondientes y no con la simple confesión. Ello no impide que se decrete la liquidación, puesto que en ésta figurarán las aportaciones de los socios, los compromisos sociales, el déficit que se repartirá entre los asociados; y ni el capital ni las utilidades pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y previa liquidación como lo ordenan los artículos 2729 y 2730 del código civil. La existencia de un bien considerado por uno de los socios como de su exclusiva propiedad y el hecho de que el mismo socio haya dispuesto de él, no le quita a la separación de bienes lo esencialmente formalista que le da la ley, para poder considerarlo así por el sólo hecho -

5.



la confesión de uno de los cónyuges. La responsable hizo ninguna consideración sobre estos razonamientos obstatante que se hicieron valer en el agravio. Se -- violó por tanto el artículo 81 del código procesal civil.

3.-En el considerando tercero de la sentencia reclamada se reproducen los razonamientos expuestos en los considerandos anteriores y se concluye que son suficientes para declarar improcedente el tercer agravio. Como se ha visto, tanto el Juez como la responsable absolvie- ron no obstante la falta de prueba de las excepciones y no obstante la existencia de pruebas suficientes para acreditar los hechos constitutivos de la acción. En consecuencia se desestima el tercer agravio sin fundamento legal y se violan los artículos 21 y 81 del código de procedimientos civiles y 19 del código civil.

4.-Si en la sentencia reclamada se hizo una interpretación inexacta de las normas aplicables y se violaron los principios generales de derecho, no es aplicable la fracción IV del artículo 140 del código de procedimientos civiles en la que se apoya la condena en costas en contra de la quejosa.

TERCERO.-Las consideraciones que sirven de fundamento a la sentencia reclamada son del tenor siguiente: es infundado el primer agravio puesto que el artículo 19 del código civil establece que las controversias judiciales del orden civil deben resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y en la especie el juzgador resolvió de acuerdo con los artículos 178 y 179 del código civil. El primero de estos preceptos establece que el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, y el segundo dice que las capitulaciones matrimoniales son las bases que los esposos fijan para constituir la sociedad conyugal o la separación

6.

de bienes y reglamentar la administración de éstos. De aquí se infiere que para que se constituya el régimen de sociedad conyugal, son indispensables las capitulaciones matrimoniales y cuando éstas no existen, puede decirse que el matrimonio carece de régimen de sociedad conyugal. El artículo 183 del citado código, dice que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones que la constituyan y en lo que no estuviera expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. Esto quiere decir que solamente son aplicables las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cuando, existiendo capitulaciones, hay omisiones en las mismas. Es infundado el segundo agravio porque el albacea de la sucesión demandada, al contestar, sostuvo que no era cierto que la sociedad conyugal hubiere adquirido los bienes que menciona la actora, puesto que fueron adquiridos por el autor de la sucesión para sí y no para la sociedad. La actora en relación con este punto replicó así: "que aun cuando algún bien haya sido adquirido con anterioridad al matrimonio, al constituirse la sociedad conyugal cada socio aportó a la misma sociedad los bienes de que haya sido propietario, puesto que no existe ninguna prueba que acredite que los socios separaron determinados bienes del régimen social a que sujetaron su unión conyugal". Lo anterior demuestra que esta cuestión sí fue materia de la litis por lo que el juez estuvo obligado a considerarla en la sentencia. Ahora bien, la actora al adoptar posiciones confesó que durante su matrimonio adquirió un terreno a su nombre como de su exclusiva propiedad mismo que inscribió con tal carácter en el Registro Público de la Propiedad y vendió posteriormente a [REDACTED]. De esta confesión que hace prueba plena, puede inferirse que nunca existió

D. 2031/57.



dad conyugal, porque nunca hubo capitulaciones matrimoniales y porque la actitud de la actora revela que los bienes adquiridos por los cónyuges lo fueron para sí. El tercer agravio es improcedente por las mismas razones anteriormente expuestas. Debiendo confirmarse la sentencia apelada, procede la condena en costas ~~en~~ contra de la recurrente.

CUARTO.- Son infundados los ~~anteriores~~ conceptos de violación, por las siguientes consideraciones jurídicas. Se señala como acto reclamado ~~la~~ sentencia definitiva de segunda instancia, confirmatoria de la apelada, que resolvió tener por ~~no procedente~~ la acción de disolución y liquidación de la sociedad conyugal ejercitada por la cónyuge actora, en ~~virtud~~ de que no acreditó su existencia, toda vez que se constituye, por las capitulaciones matrimoniales ~~se~~ demostró que en el caso, no llegaron a celebrarse. Como fundamentos en síntesis, se adujo, que el ~~contrato~~ de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes; en el primer caso, la sociedad se constituye por las capitulaciones matrimoniales y se rige -- por ellas ~~únicamente~~ únicamente en lo que no estuviere expresamente estipulado en las mismas, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad civil; pero si se demuestra que el matrimonio si bien se celebró, sujetándolo al régimen de sociedad conyugal, en cambio no se estipularon las capitulaciones que la habrían de constituir, no puede considerarse sometido a dicho régimen, sino al diverso de separación de bienes; que en esa situación, tampoco cabe admitir, que las capitulaciones, pueden sustituirse, por las disposiciones de la ley, sobre so-

D. 2031/57.

ciudad civil, porque estas últimas solamente son aplicables para suplir lo que no hubiera sido expresamente estipulado en las capitulaciones sí celebradas. Se concluyó que además como durante el matrimonio, tanto la cónyuge actora como el cónyuge demandado, adquirieron bienes inmuebles para sí respectivamente a su nombre, lógicamente nunca existió sociedad conyugal, puesto que nunca celebraron capitulaciones matrimoniales y se condujeron como si entre ellos hubiera separación de bienes y por -- tanto no había sociedad que disolver.

Ahora bien, los anteriores razonamientos, no responden a una correcta interpretación jurídica de la ley aplicable, o sea de los artículos 178, 179, 183 y 189 - del Código Civil pues la controversia judicial debió resolverse teniendo en cuenta además, lo que disponen los -
✓ artículos 194, 261, 287, 942, 1794, 1796 y 1797, en relación con lo expresamente pactado en el contrato de matrimonio y el régimen de bienes en sociedad conyugal, a que se sujetó y sus consecuencias conformes a su naturaleza, la buena fe, al uso o a la ley. En la exposición de motivos de la Comisión Redactora del anteproyecto del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, cuyas disposiciones son las que se invocan en la sentencia reclamada, se asienta lo que sigue: "Se obligó a que al "contraerse matrimonio forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si establecían comunidad o separación - "de bienes, procurándose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento más - "propicio, cuando el hombre desea hacerla compañera de "su vida. De esta manera se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa vergüenza o mal entendida -

D. 2031/57.



dad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda -
 una familia, que imperiosamente exige muchos y continua--
 "dos gastos". Y después de conocer otros puntos de vis-
 ta y tomar en cuenta observaciones, la propia Comisión -
 reiteró: "Se obligó a que al contraerse matrimonio, los --
 "cónyuges pactaran expresamente acerca de establecían
 "comunidad o separación de bienes. El Código de 1884 es-
 "tablecía que cuando los esposos no celebraran ningún con-
 "venio sobre sus bienes, por disposición de la ley quedaba
 "establecida la sociedad legal. En la Ley de Relaciones -
 "Familiares se adoptó el sistema de separación de bienes,
 "cuando los esposos nada pactaban sobre ellos. En el Pro-
 "yecto del nuevo Código se ordenó que los que pretenden -
 "contraer matrimonio, pacten expresamente la comunidad o -
 "la separación de bienes. Nada debe presumirse en esta -
 "materia; los cónyuges arreglarán lo relativo a sus bienes
 "por convenios expresos. La mujer no saldrá perjudicada -
 "en este sistema, como algunos pretenden, porque para cele-
 "brar el convenio se elige el momento que le es más propi-
 "cio, cuando el hombre desea hacerla compañera de su vida
 "y con el sistema que se pretende implantar, se combaten -
 "prejuicios muy arraigados que impiden por falsa vergüenza
 "o mal entendida dignidad, se trate de asuntos pecuniarios
 "cuando se va a fundar una familia, que imperiosamente exi-
 "ge muchos y continuados gastos. Además es una medida al-
 "tamente educadora de la mujer, obligarla a que al con--
 "traer matrimonio, cuide de sus intereses presentes y futu-
 "ros y a que no abandone enteramente su destino, en manos
 "del que va a ser su marido".

De esto se sigue, que el legislador fundamentalmente -
 se propuso que pactada la comunidad de bienes no pudiera de

D. 2031/57.

jar de producir sus efectos. Así, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el régimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, que según su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales, no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes que-rida, ni tampoco puede determinar que se considere el matrimonio, como regido por la separación de bienes, contraria al consentimiento de los cónyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es idéntica a él, puesto que ésta tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios, y persi-
gue fines económicos, en cambio, aquélla, según su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservación y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los cónyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vincula a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe es-
tarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil. Finalmente, en

D. 2031/57.



lo concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprenderá los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, así debe interpretarse que lo desearon, por ser ésto además, lo más lógico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio. con sociedad conyugal.

Todo lo expuesto, conduce a considerar, que la autoridad responsable incurrió en las violaciones aducidas -- por la quejosa, pues debió resolver que fue procedente la acción ejercitada y decretar la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación, dejando ésta para ser regulada en ejecución. /

Por cuanto a la condena en costas, como para reparar las violaciones cometidas, la responsable dictará nueva sentencia, en ella resolverá sobre costas, lo que resulte conducente.

En consecuencia, aparecen acreditadas las infracciones a las leyes ordinarias invocadas y violados los artículos 14 y 16 de la Constitución y procede conceder la -- protección de la justicia federal.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 103, fracción I y 107 fracciones I, II y V constitucionales y 76 a 79, 182, 186 y 190 de la Ley de Amparo -- reformada se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a -- la señora [REDACTED] contra la sentencia --

D. 2031/57.

que reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictada el ocho de octubre de mil novecientos cincuenta y seis en la Segunda Instancia del juicio que la quejosa siguió contra la sucesión del señor [REDACTED] para obtener la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal que constituyó con el autor de la herencia.

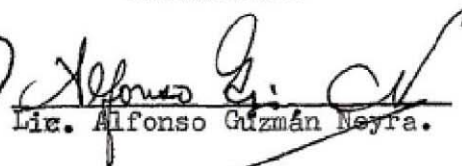
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

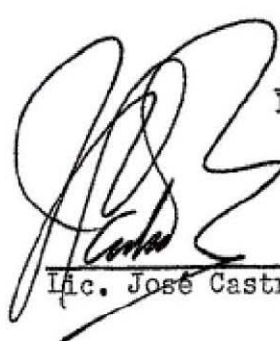
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Mariano Ramírez Vázquez, Gabriel García Rojas y Alfonso Guzmán Neyra, contra el voto del señor Ministro José Castro Estrada (ponente). El señor Ministro Vicente Santos Guajardo estuvo ausente. Engrosó este fallo el señor Ministro Mariano Ramírez Vázquez.

El señor Ministro José Castro Estrada dejó su ponencia como voto particular que figura por separado.

Firman el C. Presidente y Ministros que intervinieron con el Secretario de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:


Lic. Alfonso Guzmán Neyra.


Lic. José Castro Estrada.



Lic. Mariano Ramírez Vázquez.



D. 2031/57.



Lic. Gabriel García Rojas.

SECRETARIO:


Lic. Abelardo Cárdenas MacGregor.

23 ABR 1958

En por lista de la misma fecha, se
notificó la resolución anterior a los interesados
y al Ministerio Público Federal.


N

SENTEN

DIRECTO 2031/57.



VOTO PARTICULAR DEL C. MINISTRO JOSE CASTRO ESTRADA.

Los conceptos de violación son infundados. El artículo 178 del Código Civil del Distrito Federal establece que el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, y el 179 define las capitulaciones matrimoniales como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro caso. Por otra parte, el artículo 183 del mismo Código establece que la sociedad conyugal se registrará por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

De conformidad con estos preceptos puede afirmarse que para que la sociedad conyugal tenga existencia se requiere la celebración de capitulaciones que la constituyan. No basta en consecuencia, para ese efecto, la simple manifestación de los cónyuges en el sentido de que el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal.

Esta conclusión encuentra apoyo además en las siguientes consideraciones: de acuerdo con lo que establece el artículo 189 del Código Civil, las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener, entre otros requisitos, la lista de los inmuebles y muebles que cada consorte lleve a la sociedad, la declaración expresa de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo par

te de ellos precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad, la declaración de si los bienes futuros que adquirieren los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. Lo dispuesto en este precepto, que exige el pacto expreso respecto de cuáles son los bienes que deben formar parte de la sociedad, en concordancia con los preceptos anteriormente examinados, y en vista de que el Código vigente suprimió la sociedad legal, conduce a concluir que de acuerdo con dicho ordenamiento la sociedad conyugal debe ser contractual, y sólo se constituye por medio de capitulaciones convencionales.

Esta conclusión justifica lo argumentado por la responsable en cuanto a que la segunda parte del citado artículo 183, sólo tiene aplicación cuando habiendo capitulaciones, éstas son omisas en algunos puntos, pero no -- cuando no existen capitulaciones puesto que en este caso no puede tenerse por constituida la sociedad.


Cabe concluir, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, que la responsable estuvo en lo justo al considerar que en la especie, dada la falta de capitulaciones matrimoniales, no existió la sociedad conyugal.

Dado el resultado a que se llegó en los anteriores -- considerandos, y en vista de que la sentencia reclamada -- fue confirmatoria de la de primera instancia, la condena en costas en contra del quejoso encuentra apoyo en la -- fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.

Las consideraciones que anteceden justifican la con-



Alón de que no son fundados los conceptos de violación,
por lo que procede estimar que la sentencia reclamada no
incurre en las violaciones constitucionales que se le --
atribuyen, por lo que debe negarse el amparo que se soli-
cita.


Lic. José Castro Estrada.

S E N T E N C I A

